



NUEVA EDICIÓN
REVISADA Y
ACTUALIZADA

**MICHAEL
REID**

El continente olvidado

UNA HISTORIA DE LA NUEVA
AMÉRICA LATINA

CRÍTICA

MICHAEL
REID

El continente olvidado



UNA HISTORIA DE LA NUEVA
AMÉRICA LATINA

CRÍTICA

CAPÍTULO UNO

EL CONTINENTE OLVIDADO

Cada vez escuchamos decir con mayor insistencia que el futuro del mundo está en Asia y, particularmente, en China e India. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y posteriores, las desastrosas consecuencias de la invasión de Irak, el amargo fracaso de la Primavera Árabe y el surgimiento del nihilista y brutal Estado Islámico convierten al Medio Oriente y el mundo islámico más amplio en inevitable centro de interés estratégico para Estados Unidos y Europa. A pesar del reciente progreso, las guerras y dictadores, las epidemias y pobreza de África continúan siendo un peso en la conciencia del mundo desarrollado.

Pero, ¿qué sucede con Latinoamérica, la otra gran región del mundo en desarrollo? “Latinoamérica no importa. [...] A la gente hoy le tiene sin cuidado Latinoamérica”, le aseguró Richard Nixon al joven Donald Rumsfeld en 1971, cuando aconsejaba al futuro secretario de Defensa estadounidense qué zonas del mundo evitar si quería una carrera brillante.¹ Exceptuando el violento derrocamiento de Salvador Allende en Chile en 1973 —apoyado por la administración Nixon— y la crisis de deuda pública y guerras en Centroamérica en la década de los ochenta, su opinión fue bastante acertada durante las siguientes décadas. Desde luego, el pavoroso colapso de la economía argentina en 2001-2002 atrajo miradas horrorizadas. Los capos de las drogas y la violencia de la guerrilla en Colombia alguna vez ocuparon los titulares. Fidel Castro nunca dejó de ser una curiosidad, terca-mente instalado en su isla comunista hasta la vejez. Pero todo ello

solo sirvió para subrayar el estatus de Latinoamérica como un continente en gran medida olvidado. No era suficientemente pobre para producir lástima y atraer ayuda ni suficientemente peligroso para justificar cálculos estratégicos, y tampoco con un crecimiento económico tan rápido que les acelerara el pulso a los grandes empresarios.

Luego, repentinamente, se difuminó el velo de olvido que la mayoría de los medios de comunicación europeos y estadounidenses mantenían sobre América Latina. Las elecciones presidenciales en la región llevaron al poder a una cohorte de líderes izquierdistas de diversos tipos, en una “marea rosa” que produjo la sensación de que América Latina se estaba sacudiendo del control de Estados Unidos, bajo el cual se afirmaba que había languidecido por siempre. Gran parte del interés fue catalizado por Hugo Chávez, el voluble y populista presidente de Venezuela, que despertó el temor en algunos círculos y la esperanza en otros de que fuera otro Castro —pero un Castro provisto de petróleo—. Aparentemente siguiendo sus pasos estaban Evo Morales, líder de los cultivadores de coca y socialista, que se convirtió en el primer boliviano descendiente de indígenas andinos en ser elegido a la presidencia de su país, y Rafael Correa en Ecuador, quien se describía a sí mismo como “izquierdista cristiano”. En Brasil, la elección en 2002 de Luiz Inácio Lula da Silva, exlíder sindical nacido en la pobreza, llevó al poder al Partido de los Trabajadores (PT), el partido de izquierda más grande de Latinoamérica. Néstor Kirchner, un hasta entonces desconocido gobernador provincial de la Patagonia, y su combativa esposa, Cristina Fernández, tomaron el control de Argentina, declarándole la guerra al Fondo Monetario Internacional (FMI), las empresas extranjeras y los titulares de los bonos del país. En Chile, Michelle Bachelet, socialista cuyo padre murió tras ser torturado por la policía secreta del general Pinochet y también brevemente presa política, llegó a ser la primera mujer en América Latina elegida presidenta sin deber dicha distinción a un matrimonio con un marido famoso (de hecho, era una mujer separada y con tres hijos). José Mujica, quien como guerrillero tupamaro capturado había pasado diez años en una celda de aislamiento —dos de ellos en el fondo de un pozo con hormigas y ratas por única compañía—, fue elegido presidente de Uruguay en 2009 por el partido

de izquierda Frente Amplio. Durante su mandato, continuó viviendo con gran austeridad en su finca de tres habitaciones, conducía un viejo Volkswagen Escarabajo y almorzaba en las anodinas cafeterías de la Avenida 18 de Julio, la principal calle comercial de Montevideo. Atrajo la atención del mundo entero no solo por su modesto estilo de vida, sino también por promover con éxito la legalización de la marihuana en Uruguay.²

En 2008, ocho de las diez repúblicas suramericanas (excluyendo las Guayanas) estaban gobernadas por la izquierda, entendida en su sentido más amplio. Todo parecía indicar que algo estaba sucediendo en la región. Esto llevó a Eric Hobsbawn, historiador británico y comunista impenitente, a afirmar que “hoy, ideológicamente, me siento en casa en Latinoamérica porque es el único rincón del mundo donde la gente aún habla y hace política en el antiguo lenguaje, en el lenguaje del socialismo, comunismo y marxismo de los siglos XIX y XX”.³ Para otros era motivo de preocupación el hecho de que, en pleno siglo XXI, Latinoamérica permaneciera aparentemente atrapada en lo que consideraban arcaicas batallas ideológicas. Pero, en una región notoria por las extremas desigualdades en ingresos y riqueza, basadas no pocas veces en diferencias raciales, muchos vieron los nuevos movimientos izquierdistas como una respuesta largamente esperada al persistente legado del colonialismo ibérico.

Poco después, Latinoamérica comenzó a atraer atención por otro motivo. La vertiginosa industrialización de China y su ingreso a la economía global desataron una demanda sin precedentes de los metales, combustibles y alimentos que la región (y en especial Suramérica) produce en abundancia. Respaldada por el fuerte y sostenido incremento en los precios de las mercancías, gran parte de Latinoamérica se unió al *boom* de los mercados emergentes. En la cresta de la ola, de 2004 a 2008, la economía de la región —tomada en conjunto— tuvo un crecimiento promedio anual de 5.5 %, la inflación se mantuvo baja y las inversiones extranjeras llegaron a raudales. Fue el momento de mejor desempeño económico en Latinoamérica desde la década de los sesenta. La región navegó sin mayor problema la crisis económica mundial de 2008-2009, sufriendo tan solo una breve desaceleración. Gracias a su recién adquirida fortaleza económica, los gobiernos

estuvieron en capacidad de responder no con austeridad sino con políticas fiscales y monetarias “anticíclicas” (expansivas), sin disparar la inflación. El *boom* económico fue de la mano con un progreso social extraordinariamente rápido. En 2002, 44 % de los latinoamericanos vivía por debajo de la línea de pobreza; en 2012 esa cifra había descendido a 28 %, lo cual significa que cerca de sesenta millones de latinoamericanos habían escapado a su condición de pobres.⁴ Incluso, la distribución de los ingresos en la región se hizo un poco menos desigual. La clase media se expandió y en algunas definiciones comenzó a sobrepasar en número a los pobres. En definitiva, el decenio de 2003 a 2012 fue la “década de oro” para América Latina.

Debido a su tamaño, Brasil atrajo especial atención entre los inversionistas extranjeros. En 2003, Goldman Sachs —un banco de inversión— publicó un informe en el que subrayaba la creciente importancia para la economía mundial de los BRIC, un nuevo acrónimo en el cual Brasil asume su lugar al lado de Rusia, India y China. Brasil es el quinto país más grande en área y población y la cuarta democracia más grande del mundo. En 2012 se había convertido en la séptima economía más grande del mundo, a la par con Gran Bretaña, y comenzó a ser visto como un país de importancia global en otros aspectos tales como las negociaciones sobre el comercio mundial y los convenios medioambientales. También aspiraba a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La diplomacia expansiva de Lula le permitió a Brasil hacerse con la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y a Río de Janeiro, con los Juegos Olímpicos de 2016. Su elección como sede de estos últimos significó que Brasil finalmente era reconocido como “un país de primera categoría”, declaró Lula.

Los líderes izquierdistas de Latinoamérica proclamaron una nueva era de vínculos “sur-sur” y solidaridad regional, en una actitud de rechazo más o menos explícito a Estados Unidos y lo que ellos denominaban “su hegemonía en la región”. No tenían que insistir tanto: el desastre de Irak y la crisis financiera habían dañado su confianza en sí mismo y sus pretensiones de liderar el mundo. La eterna agonía de la zona euro, los retos de la ampliación y migraciones masivas precipitaron a la Unión Europea (UE) a la introspección y grandes

tensiones que, en junio de 2016, culminaron con el *brex*it (el voto del Reino Unido a favor de abandonar la UE). Entretanto, China se convirtió en el mayor socio comercial de varios países latinoamericanos, incluido Brasil, y en creciente fuente de inversiones y préstamos a sus gobiernos.

DEL TRIUNFALISMO AL ESTANCAMIENTO

Para el momento en que se realizaron los Juegos Olímpicos de Río, el triunfalismo se había evaporado y el ambiente en Brasil y el resto de Latinoamérica era bastante más lúgubre. A partir de 2011, la lentificación y maduración de la economía china hizo que los precios de las mercancías descendieran. En 2016, las economías latinoamericanas —tomadas en conjunto— enfrentaban su sexto año consecutivo de desaceleración. Según el FMI, el PIB de la región se estancó en 2015 y decreció 1 % en 2016.⁵ Ese promedio escondió variaciones dramáticas. Mientras el *boom* de las mercancías produjo un crecimiento uniforme en Suramérica, su colapso sacó a la luz la imprudencia y los errores de algunos de los gobiernos de izquierda. En 2016, Venezuela sufría la tasa de inflación más alta del mundo y su economía caía en picada; Brasil se encontraba atrapado en el peor bajón jamás registrado; Argentina estaba atrapada en la estanflación y Ecuador entraba en recesión. En la región, en general, la pobreza comenzó a crecer de nuevo. Por el contrario, el crecimiento continuó —aunque más lentamente— en Chile, Colombia, México y Perú, al igual que en Bolivia.

No sorprende entonces que el ciclo político comenzara a volverse en contra de la izquierda. En las elecciones presidenciales de noviembre de 2015 en Argentina, Mauricio Macri —un empresario de centroderecha— infligió una estrecha derrota al candidato de Cristina Fernández. Chávez murió de cáncer en 2013, precisamente cuando Venezuela estaba pagando el precio socioeconómico de su “socialismo del siglo XXI”. Su sucesor, Nicolás Maduro, carecía de las habilidades políticas de su mentor y, en una elección legislativa en diciembre de 2013, el régimen sufrió su primera derrota electoral a manos de su abigarrada oposición. En febrero de 2016, Morales, quien había ejercido el poder en Bolivia durante una década, perdió en un referendo

que eventualmente le habría permitido permanecer en el poder hasta 2025 (aunque después señaló que procuraría anular esa votación). En Brasil, Dilma Rousseff, la sucesora cuidadosamente escogida por Lula, fue acusada de fechorías fiscales; su enjuiciamiento político destitución —que ella denominó “golpe de Estado”, a pesar de haberse cumplido los procedimientos constitucionales— reflejó el colapso de la gobernabilidad causado por su tremenda falta de popularidad y carencia de las habilidades políticas más elementales, la recesión y un escándalo masivo de corrupción que involucró a Petrobras, la empresa petrolera estatal (y en el cual el PT estaba profundamente implicado, aunque no hay evidencia de que ella estuviese involucrada de manera personal). En Chile, Michelle Bachelet —elegida por una mayoría aplastante en 2013 para un segundo período, tras un gobierno de centroderecha— perdió popularidad y fue obligada a reducir un ambicioso —pero, técnicamente imperfecto— programa de reforma social-democrática. En Perú, un presidente de centroizquierda, Ollanta Humala, fue sucedido por Pedro Pablo Kuczynski —un ex-banquero de inversión— quien, con poco margen, derrotó a la candidata de centroderecha, Keiko Fujimori. Tan solo Ecuador rechazó la tendencia... escasamente. Correa decidió no presentarse para un cuarto período, pero su candidato, Lenin Moreno, derrotó por un estrecho margen a Guillermo Lasso, un banquero conservador.

Tras el reflujo de la “marea rosa”, hubo una combinación de indignación electoral causada por condiciones económicas más duras, ira contra la corrupción y frustración por el fracaso de los gobiernos de todas las tendencias políticas para proporcionar los mejores servicios públicos que exigían las sociedades de América Latina, menos pobres y más clase media que en el pasado. Fortalecidos por la expansión de los teléfonos inteligentes y las redes sociales en la región, los latinoamericanos salieron a las calles para expresar su rabia. En Brasil, en 2013, pequeñas protestas por el aumento de las tarifas de los autobuses en Sao Paulo se convirtieron en una ola de ira nacional contra los chanchullos de los políticos egoístas, simbolizados por los innecesariamente costosos estadios construidos para el Mundial de Fútbol, yuxtapuestos con la mala calidad del transporte público, los servicios de salud y las escuelas. En México y Honduras hubo pro-

testas masivas contra la corrupción, y otras en Guatemala y Brasil que contribuyeron a la caída de sus presidentes. En Chile, en 2006 y de nuevo en 2011-2012, decenas de miles de estudiantes salieron a las calles en repetidas ocasiones para protestar por el alto costo y la baja calidad de la educación superior. Bachelet intentó aplacarlos prometiendo que la educación universitaria sería “gratuita” (es decir, financiada por los contribuyentes), pero en su segunda presidencia nunca se recuperó de su mal manejo de un escándalo sobre un dudoso proyecto inmobiliario de su hijo y su nuera.

El problema de la corrupción, en especial en la contratación pública, se había vuelto sistemático. Odebrecht, una empresa brasileña que era la mayor constructora de América Latina y estuvo en el centro del escándalo de Petrobras, admitió haber pagado sobornos a políticos y funcionarios en otros nueve países de Latinoamérica: un total de US\$436 millones entre 2000 y 2015, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte del acuerdo de la demanda más grande jamás presentada en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Eso sin contar los US\$349 millones en sobornos pagados en Brasil.⁶

Y existía una causa adicional para el descontento de los votantes: la inseguridad crónica de la vida cotidiana en una región donde las bandas criminales llegaron a operar con impunidad en muchos países como consecuencia de fuerzas policiales y un poder judicial ineficaces y a menudo corruptos. Proporcionalmente, América Latina sufrió más asesinatos que cualquier otra parte del mundo (salvo las zonas de guerra). Con solo 8 % de la población mundial, representó alrededor de 37 % del total de homicidios en 2012, con 145.759 personas asesinadas en la región, según la ONU. A pesar del progreso social regional, la tasa de homicidios aumentó en forma inquietante.⁷ Una encuesta comisionada por el Programa de Desarrollo de la ONU sugirió que casi dos tercios de los latinoamericanos evitan salir de noche por temor a la delincuencia y uno de cada ocho se ha mudado de casa con el fin de sentirse más seguro.⁸ No es de extrañar que (al menos hasta que la desaceleración económica se impuso) las encuestas señalaran que el crimen había superado las inquietudes económicas como la mayor preocupación de los latinoamericanos. La delincuencia era

un problema que pocos gobiernos, ya fueran de izquierda o derecha, habían enfrentado.

La combinación de austeridad y corrupción era políticamente tóxica. Propició la exigencia de una alternancia de poder que es común en las democracias, pero que era algo novedoso en América Latina. De hecho, originalmente, esta combinación y el estado de ánimo contrario a los que estaban en el poder fueron lo que antes había provocado el giro a la izquierda en la región.

ENTRE EL PROGRESO Y LA TENTACIÓN POPULISTA

En los últimos años de la Guerra Fría, América Latina había experimentado una transformación histórica, con lo que pareció ser el establecimiento definitivo de los gobiernos democráticos. En 1978, aparte del Caribe de habla inglesa, solo tres países de la región eran democracias; en 1994, todos excepto Cuba y México lo eran (y México también lo sería pronto).⁹ Esta ola democrática arrastró a algunas de las dictaduras más sangrientas y canallas que los países latinoamericanos habían visto en su larga, aunque lejos de ser continua o generalizada, historia de gobiernos autoritarios. Se dio de la mano con una oleada de reformas económicas de libre mercado tras medio siglo de proteccionismo estatal. Conocido como el “Consenso de Washington” o, si se prefiere, “neoliberalismo”, generó mucho optimismo de que América Latina por fin se hubiera embarcado en lo que algunos en los mercados financieros pensaron que sería un camino continuo de crecimiento y desarrollo sostenido.

Esas entusiastas expectativas resultaron ser en exceso optimistas. La historia, como sucede a menudo, tomó un rumbo más complicado. Los frutos iniciales de la reforma económica fueron variados. La inflación, durante tanto tiempo una pesadilla latina, fue controlada. Al principio, el crecimiento repuntó, cuando la inversión extranjera llegó a raudales. Pero fue frenado y, en varios países, revertido cuando se hizo evidente por una serie de desgarradoras crisis financieras que el capital extranjero podía irse tan rápido como había llegado. Entre 1998 y 2002, la región sufrió lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (más conocida como Cepal) de las

Naciones Unidas llamó “media década perdida” de estancamiento económico. Este decepcionante récord significó que las reformas del libre mercado cayeron en un desprestigio generalizado, aunque a menudo injustamente. En particular, la privatización era detestada, en parte porque se asociaba —en algunos casos— con corrupción o la sustitución de monopolios públicos por privados. Además, las políticas del Consenso de Washington fueron ampliamente culpadas —si bien erróneamente— del colapso económico y financiero de Argentina en 2001. La “media década perdida” no solo allanó el camino para el “giro a la izquierda”, pues el electorado se resintió con los representantes de centroderecha, sino que también trajo consigo la inestabilidad política: ocho presidentes no completaron sus períodos de mandato entre 1997 y 2005.

La llegada de la izquierda al poder suscitó amplias esperanzas de una reforma progresiva. Los líderes de izquierda tenían en común su oposición retórica a lo que llamaron el “neoliberalismo”, un término —a menudo sin sentido— de abuso político que ejerce una influencia nefasta en la región. Con frecuencia se usa simplemente para denunciar una economía capitalista abierta.¹² Yo utilizaré el término ‘neoliberal’, en forma mucho más estricta, para referirme a aquellos que creen que la estabilidad macroeconómica, los mercados libres y el libre comercio *por sí mismos* son suficientes para alcanzar el desarrollo económico, en lugar de ser condiciones necesarias que exigen el complemento de un Estado efectivo.

A pesar de sus muestras de adulatoria solidaridad en frecuentes cumbres regionales, había importantes diferencias entre los distintos presidentes de izquierda. Algunos eran, hablando en términos generales, socialdemócratas latinoamericanos, mientras otros estaban más cerca de la tradición regional de populismo.¹³ Lula, los presidentes socialistas chilenos —Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018)— y el Frente Amplio de Uruguay fueron ejemplos de la primera variante. La segunda la representaron Chávez, los Kirchner, Correa y —en menor medida— Morales. Los del primer grupo eran reformistas; algunos del segundo grupo hablaban de “refundar” los sistemas políticos de sus países. Su actitud hacia las instituciones de la democracia liberal los diferenciaba. Los

socialdemócratas representaban partidos políticos más establecidos y llegaron al poder en países con instituciones más fuertes que tendían a respetar. El instinto y la práctica de los populistas, que solían ser *outsiders* (intrusos) políticos, era concentrar el poder en sus propias manos, para anular los controles al poder ejecutivo y gobernar en forma más plebiscitaria y mayoritaria.¹⁴ Pero los líderes y los partidos evolucionaron con el tiempo. Así, Morales, que debió su ascenso a los movimientos sociales autónomos, se volvió más populista estando en el cargo y el PT brasileño buscó doblegar las reglas de la democracia liberal a través de una sistemática financiación ilegal del partido. Cristina Fernández fue más intransigente que su marido (quien murió en 2010). Chávez, un exoficial del ejército que participó en un fallido golpe militar contra un gobierno electo en 1992, pertenecía a la clásica tradición latinoamericana del caudillo populista u hombre fuerte, pero luego —influido por Fidel Castro— viró hacia un estalinismo tropical, mientras se limitaba a preservar solo las apariencias de la democracia.

El populismo es un fenómeno político que ha recibido mucha atención recientemente. La etiqueta ha sido adjudicada a movimientos políticos opuestos al sistema en Europa, tanto de extrema derecha (como el caso del Partido de la Independencia en el Reino Unido, Alternative für Deutschland en Alemania y el más duradero Frente Nacional de Francia) como de extrema izquierda (Syriza en Grecia y Podemos en España), así como a la exitosa campaña de Donald Trump para las elecciones presidenciales estadounidenses en 2016. En América Latina, el populismo tiene una larga historia. Al igual que “neoliberalismo”, se ha convertido en un término cargado y normativo.¹⁵ Así que esta es mi definición. Con “populismo”, quiero decir dos cosas: primero, un tipo de política en la que un líder fuerte y carismático atrae al “pueblo”, contraponiéndolo a un opresor retórico como la “oligarquía” o “la clase dirigente” (o “Washington” en el caso de Trump). El líder pretende ser un salvador, desdibujando la distinción entre este, el gobierno, el partido y el Estado, e ignorando la necesidad de controlar al poder ejecutivo a través de contrapesos. En segundo lugar, el populismo a menudo, aunque no siempre, im-

plicó la redistribución del ingreso o la riqueza de una manera insostenible. Muchos comentaristas asumen erróneamente que el populismo es sinónimo de la izquierda. Ese no es el caso. Por tanto, si los financieros de Wall Street hubiesen identificado correctamente el hecho de que Lula, en Brasil, era un socialdemócrata y no un populista, tal vez no habrían entrado en pánico al pensar en su elección en 2002. Los clásicos líderes populistas incluyen a Juan Domingo Perón, en Argentina, y a su segunda esposa, Eva Duarte; a José María Velasco, en Ecuador, y al brasileño Getúlio Vargas, quien adoptó el populismo en sus últimos años. Algunos conservadores, como el peruano Alberto Fujimori y el colombiano Álvaro Uribe, gobernaron en varios aspectos como populistas. En algunas de sus manifestaciones pasadas, el populismo latinoamericano fue una creativa respuesta política a la desigualdad y al dominio de poderosos grupos conservadores. En otras, fue un vehículo para el autoritarismo. En muchos casos, dejó a los países —y en especial a los pobres (a quienes asegura defender)— en peores condiciones, al menos económicas.

Sin embargo, ¿por qué es tan atractivo el populismo para los votantes latinoamericanos? Porque, como señala Luis Rubio —un politólogo mexicano—, “la gente recuerda los años de crecimiento económico, no los años en que pagaron la cuenta”.¹⁶ Así mismo, según John William Cooke —un líder de la izquierda peronista en la década de 1960¹⁷—, el argentino Juan Domingo Perón se convirtió en símbolo del “único período en el que el trabajador fue feliz”. Tras desvanecerse, aparentemente, en la década de los sesenta, el retorno del populismo se debió en gran medida a la persistencia de las desigualdades extremas en ingresos y riqueza en América Latina. Esto redujo el atractivo de las reformas progresivas y aumentó el de los líderes mesiánicos que prometen un mundo nuevo. Un segundo motor del populismo ha sido la gran riqueza de recursos naturales de Latinoamérica, que va desde oro hasta petróleo. A muchos latinoamericanos se les enseña en la escuela que sus países son ricos, cuando en realidad no lo son. Si fueran los recursos naturales —en lugar del trabajo duro e instituciones efectivas— lo que hace ricos a los países, Singapur y Suiza serían indigentes. Los populistas culpan de la pobre-

za a convenientes chivos expiatorios: la corrupción, la “oligarquía”, el “imperialismo” estadounidense o las multinacionales petroleras o mineras. En tercer lugar, a medida que la política de clase se ha desvanecido, la ha reemplazado en parte una nueva política de identidad. No todos los populistas latinoamericanos son amerindios o mestizos (de raza mixta). No obstante, el atractivo de hombres como Chávez, Morales o el peruano Ollanta Humala (que hizo campaña como populista, pero no gobernó como tal durante su presidencia entre 2011 y 2016) fue en parte resultado de la identificación étnica, la idea entre los latinoamericanos más pobres y de piel más oscura de que ellos eran “uno de los nuestros”. En ese sentido, esos líderes contribuyeron a que sus democracias fueran más representativas, incluso si tal vez las perjudicaron de otras maneras.

Este desafío populista a la democracia liberal es, pues, parte del alto precio que América Latina sigue pagando por su incapacidad para derrocar más tempranamente en su historia independiente las dos grandes causas estructurales de su desigualdad socioeconómica, que están muy vinculadas: por una parte, la desigual distribución de la tierra, cuyos orígenes en muchos casos se encuentran en el período colonial y, por otra, la esclavitud (finalmente abolida solo en 1886 en Cuba y en 1888 en Brasil) y la discriminación contra la población amerindia. En Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos o la Sudáfrica del *apartheid*, la mezcla racial ha sido durante mucho tiempo la norma. Los conquistadores eran abrumadoramente hombres, al igual que los colonizadores que los siguieron, al menos hasta la independencia. La mayoría de los latinoamericanos son mestizos (de raza mixta europea e india) o mulatos (negro y europeo). Pero los pobres aún tienden a ser de piel más oscura que los ricos.

Aunque varios de los gobiernos de izquierda gobernaron pragmáticamente durante muchos años, al final muchos de ellos terminaron poniendo en peligro o destruyendo sus propios logros a causa de su arrogancia. Con demasiada frecuencia afirmaron estar liderando “revoluciones”, con un implícitamente irreversible dominio absoluto sobre el poder, en lugar de reconocer que eran los fugaces beneficiarios de la alternancia democrática en el cargo. Eso llevó a muchos a tratar de aferrarse al poder, ya fuera amañando las reglas de la democracia,

subordinando la buena gestión de la economía a la popularidad a corto plazo o ambos. El ejemplo más descarado fue Venezuela, que con Maduro cayó en una dictadura absoluta y en lo que Ban Ki-moon —el Secretario General de la ONU— denominó una “crisis humanitaria” (ver el capítulo 7). El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, utilizó su control de las autoridades electorales para expulsar a la oposición del Congreso y negarle a su principal oponente el derecho a participar en una elección presidencial en 2016. Nombró a su esposa —Rosario Murillo— como compañera de fórmula, de modo que estableció una dictadura dinástica como la de los Somoza, a los que había derrocado en 1979 como líder de la Revolución Sandinista. Un ejemplo siniestro y absurdo fue el intento de Cristina Fernández de ocultar la inflación y exagerar el crecimiento económico publicando estadísticas falsas. En Ecuador, Correa acosó con mano dura a los medios de comunicación.

CONTINUIDADES Y DIVERGENCIAS

A mediados de la segunda década del siglo XXI, parecía que —como en una novela de Gabriel García Márquez— América Latina había retornado al principio. Mientras muchos países asiáticos siguieron avanzando económicamente, Latinoamérica se arriesgó a un nuevo período de estancamiento y, tal vez, de inestabilidad política e irrelevancia global. Pero el *boom* de las materias primas y el giro a la izquierda habían cambiado la región de manera significativa. En muchos países hubo más continuidad y progreso subyacente de lo que parecía.

Con 630 millones de personas en 2015, Latinoamérica y el Caribe es una región de ingresos medios casi uniforme, con un ingreso anual por persona cercano a US\$ 9000. Tomando en cuenta el poder adquisitivo, esa cifra asciende a más de US\$ 15.000, oscilando desde casi US\$ 23.500 en Chile a tan solo US\$ 1750 en Haití.¹⁸ En la mayoría de los indicadores sociales, América Latina va mejor que otras partes del mundo en desarrollo, pero recientemente ha sido alcanzada por Asia Oriental (tabla 1).

Tabla 1. Indicadores socioeconómicos
Comparativo por región

	Expectativa de vida al nacer (en años) 2015	Mortalidad infantil – Tasa por cada 1000 nacimientos, 2015	Porcentaje de personas que viven con menos de US\$ 1,90* al día, 2013	Porcentaje de personas con acceso a una fuente de agua mejorada 2015
Asia Oriental y Pacífico	75	14	3.5	94
Europa y Asia Central	77	10	2.2	98
América Latina y el Caribe	75	15	5.4	94
Medio Oriente y África del Norte	73	20	2.1	93
Asia del Sur	68	42	15.1	92
África subsahariana	59	56	41	68

* En dólares de 2011, en paridad de poder adquisitivo.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial, 2016.

En las últimas décadas, la región ha experimentado varios conjuntos superpuestos de cambios fuertes. El primero es el de la democracia misma, que podía basarse en una larga —aunque truncada— tradición de constitucionalismo, pero que tuvo que luchar contra arraigados hábitos y prácticas antidemocráticas. A pesar del claro retroceso en Venezuela y Nicaragua, en otros países se ha detenido el péndulo entre dictadura y democracia que marcó gran parte del siglo XX en América Latina. Los golpes de Estado son en gran medida una cosa del pasado: la excepción que confirma la regla fue un conflicto de poderes en Honduras que terminó con el Ejército —actuando por petición del Congreso y la Corte Suprema— expulsando al presidente, Manuel Zelaya, e instalando a otro civil en el cargo. Desde 1990, ningún militar en servicio activo ha servido como presidente de un país latinoamericano.¹⁹

En segundo lugar, desde la década de los sesenta la región pasó de una predominancia rural a ser principalmente urbana, una transformación que en Europa fue mucho más gradual. Las ciudades crecieron de manera explosiva: la población de la región metropolitana de São Paulo pasó de 69.000 en 1890 a 12 millones en 1976 y 21 millones hoy. Así mismo, la población de Lima creció casi ocho veces durante cuatro décadas hasta 1981.²⁰ Entonces, no es sorprendente que semejante crecimiento urbano haya agobiado a los gobiernos ni que los servicios públicos no hayan podido mantener el paso. Las ciudades latinoamericanas típicamente reflejaban —en hormigón y en cartón— las injusticias de la sociedad en general: estaban conformadas por grandes bolsillos de pobreza y por riqueza ostentosa. Gran parte de la población urbana residía en viviendas de autoconstrucción sin títulos legales claros: en Perú, por ejemplo, más de la mitad en el cambio de siglo, mientras que en Haití la cifra llegaba al 68 %.²¹ Pero, con el tiempo, la mayoría de estos asentamientos adquirió muchas de las comodidades de la vida urbana: electricidad, agua, alcantarillado, calles pavimentadas, parques y, durante la última década más o menos, modernas tiendas y cines multiplex.

En tercer lugar, en las décadas de los ochenta y los noventa las economías de América Latina se sacudieron de un denso capullo de protección, regulación estatal y costosas distorsiones económicas. La

más visible de ellas fue la inflación, fenómeno en el cual la región fue durante mucho tiempo líder mundial. Las reformas de mercado de los años ochenta y noventa coincidieron con —y de alguna manera fueron posibles gracias a— el inicio de un nuevo período de globalización que representó muchos beneficios para los latinoamericanos, en forma de incrementos en las exportaciones e ingresos, así como acceso a bienes de consumo importados baratos. Incluso mientras el Consenso de Washington era denunciado rutinariamente, sus principios fundamentales —de estabilidad macroeconómica y economías de mercado abiertas— se convirtieron en una parte perdurable del panorama en muchos países de la región. Ciertamente, se cometieron errores en la implementación de las reformas de mercado (ver capítulo 6), pero la falla principal fue que el Estado y las instituciones públicas permanecieron esencialmente sin reformar. Estados más efectivos y mejores políticas públicas son la clave para reducir la desigualdad y permitir a los latinoamericanos competir más efectivamente en el mundo.

Una cuarta transformación se dio en las sociedades de la región, que han visto —en promedio— una mejora dramática en las condiciones de vivienda y acceso a los servicios básicos. Los latinoamericanos están mejor educados, gozan de mejor salud y son menos pobres y más clase media que nunca (ver capítulo 9). Sus sociedades son más dinámicas, más exigentes y más complejas de lo que eran en el año 2000, por no hablar de 1980.

Aún quedan muchas dificultades profundamente arraigadas que analizo en detalle en los capítulos siguientes. Cinco conjuntos de problemas se destacan. El primero es la desigualdad. A comienzos del siglo XXI, el 10 % más rico acumulaba en promedio 43 % de los ingresos totales por trabajo, mientras que el 20 % más pobre recibía solo 3,1 %. Por el contrario, en Estados Unidos, el 10 % más rico recibía el 31 % y el 20 % más pobre, el 5 %; en Italia, las cifras eran de 27 % y 6 %, respectivamente. En 2013, la participación del 10 % más rico en América Latina había caído a 38 % y la del 20 % más pobre había ascendido a 3,9 %.²² La disminución de la desigualdad de ingresos durante la última década fue bienvenida y se dio a contracorriente de la tendencia en muchos países desarrollados. Aun así,

Latinoamérica todavía competía con África subsahariana como el lugar más desigual del planeta.

En segundo lugar, las elecciones regulares y por lo general limpias y un mucho mayor respeto por los derechos humanos no han sido suficientes para garantizar la aplicación universal de la ley o un gobierno eficaz. El crimen y la inseguridad son las manifestaciones más visibles de esto. Con demasiada frecuencia, la justicia es lenta, venal, arbitraria o, simplemente, inexistente. En esas circunstancias, la igualdad ante la ley sigue siendo una perspectiva distante: los poderosos, por lo general, encuentran formas de protegerse a sí mismos; los pobres, a menudo no lo logran. También en otros sentidos crear una sociedad democrática y una ciudadanía igualitaria sigue siendo un trabajo en progreso. Otro síntoma del mal funcionamiento de la ley y sus instituciones es la omnipresencia de la economía informal en América Latina. En muchos países, las instituciones centrales de la democracia —el Congreso, los partidos políticos, los tribunales— son vistas con desprecio en lugar de respeto. Los políticos son ridiculizados por corruptos y egocéntricos —y, con demasiada frecuencia, lo son—.

En tercer lugar, el *boom* de las materias primas ocultó grandes debilidades subyacentes en el desempeño económico de Latinoamérica. Estas son evidentes en la baja productividad de muchas de las compañías y trabajadores de la región y en la falta de competitividad de muchas de sus empresas. Abordar eso es vital si la región aspira a continuar progresando en un entorno global menos amable. La urgencia es mayor por el hecho de que América Latina está viviendo una rápida transición demográfica: a mediados de la década de los veinte del presente siglo, la fuerza laboral comenzará a reducirse en relación con la población dependiente.²³ En otras palabras, América Latina está empezando a envejecer antes de enriquecerse. Las causas de la baja productividad son muchas: incluyen la informalidad generalizada, la falta de educación y habilidades, y una infraestructura deficiente o inexistente. Tampoco ayuda que muchas de las grandes ciudades de la región son caóticas, están contaminadas y viven atascadas por el tráfico, lo que significa que muchos trabajadores se enfren-

tan a un viaje diario de ida y vuelta de tres horas aproximadamente, encerrados en autobuses atiborrados o, en menos casos, en trenes.

En cuarto lugar, la política también puede hacerse más difícil. Que la hegemonía de la izquierda, tanto institucionalista como populista, haya durado tanto se debió en buena parte al *boom* de las materias primas. Esto dio a los líderes izquierdistas mayores ingresos fiscales para invertir en la expansión de los servicios sociales y la redistribución, sin tener que recurrir forzosamente a la impresión de dinero y la inflación, como fue el caso en los años ochenta. En países con muchas personas pobres y una enorme desigualdad de ingresos, tales políticas fueron populares. Ahora, los años de fácil crecimiento han llegado a su fin. La desaceleración amenaza el progreso social de la última docena de años. Las investigaciones del Banco Mundial han encontrado que la mayor parte del descenso de la pobreza provino de un crecimiento económico más rápido (a través de la expansión del empleo y mejores salarios) y no de políticas sociales redistributivas. En tiempos más difíciles, los políticos tendrán que tratar de satisfacer a la expandida clase media, cuyas frustraciones tienen implicaciones potencialmente explosivas para el orden político.²⁴ Según un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, unos 30 millones de latinoamericanos que salieron de la pobreza ahora corren el riesgo de volver a caer en ella; muchos de ellos son personas jóvenes y mujeres con trabajos inestables en el área de los servicios.²⁵

Tampoco ayuda el hecho de que, en muchos países, los recursos políticos están bajo presión. Esas dinámicas sociedades a menudo son gobernadas por sistemas políticos fosilizados. Así como los partidos tradicionales han decaído, la política se ha fragmentado. Los temores sobre la “gobernabilidad” se esfumaron cuando los gobernantes eran populares. Ahora la región puede enfrentar ciclos políticos más cortos, con el riesgo de renovados alborotos o estancamientos. Podría ayudar el hecho de que la polarización ideológica que caracterizó a América Latina en la Guerra Fría, y que fue revivida por Chávez y sus amigos, parece estar disminuyendo en intensidad a favor de un centrismo pragmático. Una bien acogida señal de esto fue que en Colombia, en septiembre de 2016, luego de cuatro años de arduas

negociaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos, las guerrillas estalinistas de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) acordaron poner fin a su insurgencia armada, que comenzó en 1964. Otra fue que los políticos de centroderecha, como Macri y Kuczynski, reconocieron la necesidad de políticas sociales y sociedades más justas. El virus populista sigue presente en el cuerpo político de América Latina pero, al menos en muchos países, parece haber entrado en remisión.

Por último, en marcado contraste con las últimas décadas, tal vez el mayor problema que enfrenta la región ahora sea uno externo. El orden mundial liberal y la era de globalización que prevalecieron entre la caída del muro de Berlín en 1989 y la crisis financiera de 2008 proporcionaron a América Latina un entorno favorable y predecible para buscar la democratización y la reforma económica. Hoy, el panorama internacional es mucho más oscuro e incierto. Si quiere regresar a un crecimiento económico más rápido, América Latina tiene que aumentar sus exportaciones. Pero, desde la crisis financiera, el crecimiento del comercio mundial es mucho más lento y los sentimientos proteccionistas van en aumento. Es una ironía que, justo cuando Latinoamérica comenzaba a emerger de su más reciente ciclo populista, el resto del mundo descubriera los dudosos encantos del populismo. Tres países latinoamericanos —Chile, México y Perú— fueron signatarios del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, un acuerdo comercial entre doce países, defendido por Barack Obama y rechazado por Donald Trump. Para México, el presidente Trump representa un peligro potencialmente grave, si cumple sus amenazas de levantar un muro para aislar al país y socavar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), que vincula a los dos países y Canadá. Y las promesas fiscales expansivas de Trump respaldan la probabilidad de una política monetaria mucho más estricta en Estados Unidos, que pondría fin a la era de créditos baratos que comenzó con la crisis financiera y aumentaría el costo de los préstamos para los gobiernos y empresas de América Latina.